

## Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 07 de Madrid

C/ Gran Vía, 19 , Planta 1 - 28013

45029720

NIG: 28.079.00.3-2019/0029654

### Procedimiento Abreviado 532/2019 Demandante/s:

PIROTECNIA VULCANO S.L

PROCURADOR D./Dña. JAIME GONZALEZ MINGUEZ

**Demandado/s:** AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

LETRADO D./Dña. MERCEDES GONZALEZ-ESTRADA ALVAREZ-MONTALVO,

AV.: ALBERTO ALCOCER 24, 6º A, C.P.:28036 MADRID (Madrid)

### SENTENCIA Nº 27/2021

En Madrid, a 02 de febrero de 2021.

El Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez Sanz, Magistrado Juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Madrid ha visto los presentes autos de procedimiento abreviado seguidos en este Juzgado con el número arriba referenciado entre las siguientes partes:

**DEMANDANTE: PIROTECNIA VULCANO SL.** Esta parte ha actuado en este procedimiento representada por el procurador Sr. González Mínguez y defendida por la Letrada Sra. Sánchez-Gómez Carreño según se ha acreditado en el momento procesal oportuno.

**ADMINISTRACIÓN DEMANDADA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS** representado y defendida por la Letrada Sra. González-Estrada según se ha acreditado oportunamente.

**ACTUACIÓN RECURRIDA:** Adjudicación por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas, a la mercantil F.A. del Mediterráneo SLU, adjudicación publicada en la Plataforma de contratos del Sector Público, el 17 de septiembre de 2019, del contrato de fuegos artificiales durante las fiestas patronales de San Miguel 2019



Y dicta, en nombre de S.M. El Rey, la presente sentencia con base en los siguientes  
**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Turnado a este Juzgado el escrito de demanda interponiendo el recurso contencioso-administrativo contra la resolución indicada en el encabezamiento de esta sentencia, fue admitida a trámite, solicitando el expediente administrativo, mandando emplazar a las partes y señalando el día y la hora para la celebración de la vista oral prevista en el artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En síntesis, se expone en la demanda que con fecha 17 de septiembre de 2019, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas, adjudicó a la mercantil F.A. del Mediterráneo S.L.U., el contrato de fuegos artificiales durante las Fiestas Patronales de San Miguel 2019, por el precio de diecisiete mil quinientos noventa y siete euros con noventa y ocho céntimos de euro. (17.597,98€), siendo el presupuesto base de licitación de veintitrés mil setecientos ochenta y un euros con seis céntimos de euro. (23.781,06€). En la referida Plataforma de Contratación, se publicó igualmente, la certificación emitida por el Secretario del Ayuntamiento de Las Rozas, con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida con carácter urgente, para la adjudicación del referido contrato.

En dicha certificación se recoge la adjudicación a F.A. del Mediterráneo, por el importe de diecisiete mil quinientos noventa y siete euros con noventa y ocho céntimos de euro. (17.597,98€), con las mejoras de incremento del 10% de la materia reglamentada y la cobertura del seguro de responsabilidad civil a 5.000.001€.

Igualmente se recoge la puntuación final obtenida por cada uno de los diez licitadores, entre los que se encuentra mi mandante, pero no se recoge en ningún documento la puntuación concreta por cada uno de los criterios de adjudicación, siendo este requisito imprescindible, para poder verificar la corrección de la adjudicación y la no temeridad en la baja propuesta por el adjudicatario

A esta parte le es inviable comprobar la exactitud de la puntuación obtenida por cada criterio de adjudicación y si la oferta del adjudicatario ha incurrido en desproporcionada, ya que en el propio Pliego de Prescripciones Técnicas se recoge que se desestimarán las ofertas que se consideren desproporcionadas, y se atenderá a la proporcionalidad entre las ofertas presentadas, atendiendo al porcentaje de baja ofertado sobre el presupuesto base de licitación.



Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que la falta de desglose de la puntuación incurre en que no sabemos si la cantidad de kilogramos de materia reglamentada (NEC) resulta desproporcionada con la oferta económica de licitación que se establece, más cuando el precio va a la baja y se establecen como mejoras el incremento de dicha materia reglamentada.

Los técnicos de los diferentes Ayuntamientos, no tienen conocimientos ni medios para comprobar que en el momento del espectáculo pirotécnico los kilos suministrados se corresponden con los estipulados en el contrato, y por tanto ofertados por los licitadores, por lo que no sabemos si resulta viable el precio con la materia reglamentada, máxime cuando no sabemos los criterios exactos y la puntuación obtenida para cada uno de los criterios.

Mi mandante, como empresa de reconocido prestigio en el Sector, además de realizar y fabricar espectáculos de fuegos artificiales, tiene licencia de importación número 1036/00 expedida el 13 de marzo de 2000, por el Ministerio de Industria y Energía y distribuye dichos artículos a otras empresas del sector, teniendo constancia de que el precio de mercado del kilogramo de materia reglamentada (NEC) se sitúa alrededor de los 60% con un margen a mayor o menor del 5%., en función del calibre, efecto a realizar y calidad del artículo; por lo que no sabemos si resultará inviable la asunción de esa cantidad de kilogramos fijados como mínimo en el Pliego de contratación y en las mejoras ofertadas.

En segundo lugar, entre los criterios de adjudicación se disponía la cobertura de un seguro de responsabilidad civil por unos importes determinados.

El adjudicatario en el momento de presentarse a la licitación, no contaba con el referido seguro por la cobertura indicada en el Pliego, habiendo contratado el referido seguro tras serle adjudicado el contrato.

En el momento de la licitación, los licitadores deberán contar con los requisitos que se incluyen en los pliegos de licitación, no pudiendo ser valorados en la adjudicación si en ese momento no cumple con los referidos requisitos.

**SEGUNDO.-** Al acto de la vista acuden las partes debidamente representadas y asistidas por sus letrados, que realizan una exposición detallada de sus pretensiones y de los fundamentos jurídicos en los que las apoyan.

Por la parte demandada se alegó que la resolución se notificó en 17 de septiembre de 2019 por lo que entiende que la demanda es extemporánea. También invoca el art. 45.2.d



LJCA al no aportarse el acuerdo social. En cuanto al fondo entiende que no hay motivación en el acuerdo, y alega que en el acta de la mesa, folios 587 y 588 EA, aparecen los requisitos y la valoración de cada uno de esos requisitos. La valoración es conforme a los pliegos.

Podía la actora haber pedido vista del expediente para comprobar estos extremos.

Se invoca desproporcionalidad en la materia reglamentada. Ello no está acreditado. Respecto al tema del seguro de RC se indica que se exigía un compromiso sobre el seguro, y se valoraba, punto 5 del pliego de prescripciones técnicas, no se dice que deba tener suscrito el seguro.

**TERCERO.-** Durante la celebración de la vista oral se ha practicado prueba documental con el resultado que consta en el acta correspondiente. La actora entiende que la notificación fue el 17 de septiembre por lo que estaría en el plazo de dos meses. El acuerdo desconoce si se aportó, se le tendría que haber requerido.

**CUARTO.-** La cuantía fue fijada en 23.781,06€.

**QUINTO.-** Terminada la práctica de las pruebas admitidas, las partes han formulado conclusiones orales valorando el resultado de las pruebas practicadas en relación con el asunto que se enjuicia y las pretensiones que sobre el mismo ejercen.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El asunto que se enjuicia corresponde al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la LJCA siendo competente para su conocimiento este Juzgado conforme se dispone en el artículo 8 en relación con el artículo 14 de la misma.

**SEGUNDO.-** Previamente a entrar en el fondo del asunto hay que resolver la cuestión relativa a la extemporaneidad del recurso contencioso. El plazo para interponer el recurso contencioso es de dos meses, art. 46.1 LJCA, contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. La STS de 16 de mayo de 2014 (re.



2700/2012) expone:

En este sentido cabe advertir que es exponente de la existencia de doctrina legal la fundamentación jurídica expuesta en la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 2008 (RC 32/2006 ), en la que acogimos la doctrina jurisprudencial sostenida en la sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2008 (RC 9064/2004 ), en relación con la unificación normativa respecto del cómputo de los plazos procedimentales y de los plazos procesales regulados respectivamente en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, con este razonamiento: « Es reiteradísima la doctrina de esta Sala sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación [...]».

Por todas citaremos la Sentencia de 8 de Marzo de 2.006 (Rec 6767/2003 ) donde decimos:

"... acogiendo la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 15 de diciembre de 2005 (RC 592/2003 ), que expone cual es la finalidad de la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y resume la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia en los siguientes términos:

"La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio expreso -puesto de relieve en el curso de los debates parlamentarios que condujeron a su aprobación- de unificar, en materia de plazos, el cómputo de los administrativos a los que se refiere el artículo 48.2 de la Ley 30/1992 con los jurisdiccionales regulados por el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en cuanto al día inicial o dies a quo: en ambas normas se establece que los "meses" se cuentan o computan desde (o "a partir de") el día siguiente al de la notificación del acto o publicación de la disposición. En ambas normas se omite, paralelamente, la expresión de que el cómputo de dichos meses haya de ser realizado "de fecha a fecha".

Esta omisión, sin embargo, no significa que para la determinación del día final o dies ad quem pueda acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero, éste era precisamente el último día del plazo. La doctrina sigue siendo aplicable, decimos, porque la regla "de fecha a fecha" subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos.



Y más recientemente cabe citar la STJCM de 12 de febrero de 2018, re. 360/2016, en un caso muy similar al aquí enjuiciado:

TERCERO.- Efectivamente, es un hecho conforme que la resolución litigiosa fue notificada al apelante en 05 de marzo de 2014, y, la cuestión que nos ocupa es determinar si el plazo para la interposición del recurso Contencioso-Administrativo vencía el 05 de mayo de 2014, pudiendo presentarlo hasta las 15 horas del día 06 de mayo de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ha entendido el Juez a quo, o, si por el contrario, vencía el día 06 de mayo de 2014, con posibilidad de presentarlo hasta las 15 horas del día 07 de mayo de 2014, fecha esta última en la que tuvo entrada en el Registro de los Juzgados de Valencia.

El presente Recurso de Apelación debe ser desestimado aplicando la **doctrina del Tribunal Supremo en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2017** (Rec. Cas para la Unificación de Doctrina nº 1034/2016), cuyo tenor es el que sigue, en lo que aquí interesa, y, que viene a corroborar la interpretación que ha efectuado el Juez a quo, y, que esta Sala comparte:

"(...) es exponente de la existencia de doctrina legal la fundamentación jurídica expuesta en la sentencia de esta Sala de 10 de junio de 2008 (recurso de casación nº 32/2006), en la que acogimos la doctrina jurisprudencial sostenida en la sentencia de esta Sala de 9 de mayo de 2008 (recurso de casación nº 9064/2004), en relación con la unificación normativa respecto del cómputo de los plazos procedimentales y de los plazos procesales regulados respectivamente en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, con este razonamiento: "[...]

Es reiteradísima la doctrina de esta Sala sobre los plazos señalados por meses que se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo del plazo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, pero siendo la del vencimiento la del día correlativo mensual al de la notificación [...].

Por todas citaremos la **Sentencia de 8 de Marzo de 2.006** (Rec. 6767/2003) donde decimos:

"... acogiendo la doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de 15 de diciembre de 2005 (RC 592/2003), que expone cual es la finalidad de la reforma del artículo 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y resume la jurisprudencia de esta Sala sobre la materia en los siguientes términos:

"La reforma legislativa de 1999 tuvo el designio expreso -puesto de relieve en el curso de los debates parlamentarios que condujeron a su aprobación- de unificar, en materia de plazos, el cómputo de los administrativos a los que se refiere el artículo 48.2 de la Ley



30/1992 con los jurisdiccionales regulados por el artículo 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa , en cuanto al día inicial o dies a quo : en ambas normas se establece que los " meses " se cuentan o computan desde (o "a partir de") el día siguiente al de la notificación del acto o publicación de la disposición. En ambas normas se omite, paralelamente, la expresión de que el cómputo de dichos meses haya de ser realizado "de fecha a fecha".

Esta omisión, sin embargo, no significa que para la determinación del día final o dies ad quem pueda acogerse la tesis de la actora. Por el contrario, sigue siendo aplicable la doctrina unánime de que el cómputo termina el mismo día (hábil) correspondiente del mes siguiente. En nuestro caso, notificada la resolución el 17 de enero y siendo hábil el 17 de febrero, éste era precisamente el último día del plazo. La doctrina sigue siendo aplicable, decimos, porque la regla "de fecha a fecha" subsiste como principio general del cómputo de los plazos que se cuentan por meses, a los efectos de determinar cuál sea el último día de dichos plazos.

El plazo terminaba por lo tanto el día 17 de noviembre, pero rige el art. 135 LEC según el cual “5. *La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo*”. El recurso se presentó el día 18 de noviembre, pero a las 19.58 horas, tal y como consta en la carátula del procedimiento con los datos del Decanato, por lo que debe declararse la inadmisión del recurso.

**TERCERO.-** En materia de costas rige el art. 139 LJCA, que establece el criterio de vencimiento como norma general, salvo el caso de concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho, circunstancia ésta que ha de ser expresamente motivada por el Juzgador.

En el presente caso, pese a la inadmisión de la demanda entiendo que surgían dudas sobre el cómputo que aconsejan no imponer costas.

En atención a lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general aplicación





## FALLO

Que debo inadmitir e inadmito la demanda presentada contra la adjudicación por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas, a la mercantil F.A. del Mediterráneo SLU, adjudicación publicada en la Plataforma de contratos del Sector Público, el 17 de septiembre de 2019, del contrato de fuegos artificiales durante las fiestas patronales de San Miguel 2019

No se hace expreso pronunciamiento en costas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días a contar desde su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

**PUBLICACIÓN.-** Firmada y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, es entregada en el día de la fecha a esta Secretaría para su notificación, expídase testimonio literal de la misma para su unión al procedimiento y copias para su notificación y únase el original al libro de sentencias. En Madrid a 2 de febrero de 2021.

Doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.





Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia de inadmisibilidad firmado electrónicamente por CARLOS SANCHEZ SANZ